



# Asamblea General

Distr. general  
18 de enero de 2021  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 89º período de sesiones, 23 a 27 de noviembre de 2020

#### Opinión núm. 78/2020, relativa a Kai Li (China)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 10 de marzo de 2020 al Gobierno de China una comunicación relativa a Kai Li. El Gobierno respondió a la comunicación el 29 de abril de 2020. El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).



## Información recibida

### *Comunicación de la fuente*

4. Kai Li, nacido en 1962, es un ciudadano de los Estados Unidos de América. Suele residir en Nueva York. El Sr. Li posee una empresa que distribuye simuladores solares, procesadores de células fotovoltaicas y material para aplicaciones espaciales y terrestres.
5. La fuente afirma que, el 9 de septiembre de 2016, el Sr. Li llegó a Shanghái para ver a su familia con motivo del primer aniversario de la muerte de su madre. Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Pudong, fue detenido inmediatamente por funcionarios de la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái.
6. La fuente informa de que el único documento proporcionado por las autoridades cuando se detuvo al Sr. Li era una notificación de vigilancia domiciliaria en la que se citaba el artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal<sup>1</sup>. Este artículo permite a las autoridades detener a las personas sospechosas de poner en peligro la seguridad del Estado y las obliga a notificar la situación a la familia en un plazo de 24 horas a partir de la aplicación de la medida de vigilancia domiciliaria.
7. La fuente sostiene que las notificaciones de vigilancia domiciliaria no son una orden judicial en el sentido estricto del término, ya que no proporcionan ninguna razón que aclare por qué, en el caso del Sr. Li, se sospecha que representa un peligro para la seguridad del Estado. Según la fuente, las autoridades de los Estados Unidos han pedido reiteradamente esa información, pero se les ha denegado.
8. La fuente informa además de que, el 25 de noviembre de 2016, tras dos meses y medio de vigilancia domiciliaria en un lugar designado, la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái proporcionó una notificación formal de arresto. Las autoridades no dieron ninguna razón específica para justificar el arresto del Sr. Li. Según la fuente, la notificación de arresto contiene una acusación poco precisa de espionaje. Además, hace referencia al artículo 78 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
9. La fuente señala que la disposición mencionada establece que todo arresto debe ser aprobado por una fiscalía o un tribunal. La fuente informa de que el expediente se trasladó por primera vez a la fiscalía el 24 de febrero de 2017, es decir, cinco meses y medio después del arresto. La causa fue vista por primera vez por un tribunal en abril de 2017. Por lo tanto, la fuente concluye que el fundamento jurídico del arresto del Sr. Li no está claro.
10. La fuente afirma que, una vez se notificó formalmente el arresto del Sr. Li, el 25 de noviembre de 2016 se lo trasladó al centro de detención núm. 1 de Shanghái, donde permaneció recluso hasta principios de marzo de 2019. Desde entonces, el Sr. Li ha estado recluso en la prisión de Qingpu, en Shanghái.
11. La fuente informa de que las autoridades no proporcionaron ningún otro motivo para justificar la prisión preventiva del Sr. Li, más allá de las vagas sospechas de espionaje que se mencionan en la notificación de arresto.
12. La fuente informa además de que el juicio, que inicialmente estaba previsto para mayo de 2017, fue aplazado dos veces sin explicación de las autoridades, hasta el 10 de agosto de 2017, casi un año después del arresto inicial del Sr. Li. La sentencia se dictó casi un año después —el 25 de julio de 2018—, cuando el Tribunal Popular Intermedio núm. 1 de Shanghái emitió un fallo condenatorio contra el Sr. Li. En la sentencia, el Sr. Li fue declarado culpable de recopilar cuatro secretos de Estado en nombre de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y fue condenado a diez años de prisión, a pagar una multa de 50.000 yuan (aproximadamente 7.300 dólares de los Estados Unidos) y a ser expulsado del país.
13. La fuente señala que el juicio se celebró a puerta cerrada, lo que, según la fuente, es contrario al artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La fuente añade

<sup>1</sup> En la revisión de 2018 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo correspondiente es ahora el artículo 75.

que los tribunales de China no gozan de independencia judicial y condenan a más del 99,9 % de las personas enjuiciadas.

14. La audiencia en apelación de la causa del Sr. Li tuvo lugar el 29 de diciembre de 2018, y también se celebró a puerta cerrada. Antes de la audiencia en que se dictaría sentencia, la jueza que presidía el tribunal señaló que no tenía ningún control real sobre el resultado del asunto y que estaba “esperando las orientaciones de su jefe” con respecto a la condena del Sr. Li. La fuente afirma que ese hecho es un indicio claro de que el Sr. Li no fue sometido a un juicio con las debidas garantías por un tribunal imparcial. Más bien, la detención del Sr. Li fue ordenada por las autoridades políticas que estaban facultadas para imponer su criterio a la jueza. La fuente cuestiona la existencia de cualquier tipo de prueba contra el Sr. Li. Afirma que el Sr. Li fue presionado para que se declarara culpable.

15. La fuente afirma además que la causa del Sr. Li se caracterizó por la falta de transparencia procesal. Por ejemplo, señala que, según el artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se citaba en la notificación inicial de vigilancia domiciliaria, la Fiscalía Popular debe supervisar la ejecución de la vigilancia domiciliaria en un lugar designado. Sin embargo, no hay indicios de que la Fiscalía interviniera durante todo el período en que el Sr. Li fue objeto de esa medida de vigilancia domiciliaria.

16. La fuente señala también que, tras el traslado del Sr. Li al centro de detención, los representantes del Consulado de los Estados Unidos en Shanghái preguntaron en repetidas ocasiones si la causa había sido trasladada a la fiscalía, pero las autoridades chinas se negaron a responder o a proporcionar cualquier documentación escrita.

17. Tras el juicio del Sr. Li, celebrado el 10 de agosto de 2017, hubo un período de tres meses durante el cual no se dio ninguna explicación por el continuo retraso de la audiencia en que se dictaría sentencia. Entonces, el 9 de noviembre de 2017 se notificó retroactivamente al Sr. Li y a su representante legal que, el 30 de septiembre de 2017, la causa había sido devuelta por el tribunal a la fiscalía para que realizara más pesquisas, y que luego supuestamente se había vuelto a trasladar al tribunal 30 días después. Las pesquisas adicionales no permitieron obtener ninguna prueba nueva. Por lo tanto, la fuente afirma que las autoridades encargadas del asunto del Sr. Li han optado por aplicar sus propios plazos y procedimientos al caso, y justificar sus actos retroactivamente para ajustarse formalmente a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

18. La fuente afirma además que al Sr. Li no se le permitió tener asistencia letrada hasta principios de 2017, y que no tuvo acceso a un abogado o abogada durante su período de vigilancia domiciliaria en un lugar designado. La fuente afirma que la vigilancia domiciliaria en un lugar designado es una práctica coercitiva consistente en detener a personas en un lugar no especificado y no supervisado, donde se las somete a un severo interrogatorio diario sin acceso a representación legal, en contravención del artículo 33 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual las personas acusadas tienen derecho a contratar a un abogado o abogada en cualquier momento. La fuente añade que las pruebas y confesiones forzadas obtenidas durante los períodos de vigilancia domiciliaria en un lugar designado se consideran legalmente válidas. La fuente cuestiona la validez de las pruebas obtenidas sin acceso a representación legal y afirma que no pueden considerarse parte de un juicio con las debidas garantías.

19. La fuente afirma además que, incluso después de que el Sr. Li fuera trasladado al centro de detención, las autoridades no le permitieron reunirse con un representante legal hasta que hubieron pasado varios meses. Durante la visita consular de diciembre de 2016, un funcionario de la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái informó a un representante consular de los Estados Unidos de que se debía determinar si la seguridad de China podría correr peligro por permitir que el Sr. Li se reuniera con su representante legal. Posteriormente se rechazó la petición del representante del Sr. Li de reunirse con él, y solo permitieron el intercambio de correspondencia escrita que era controlada y examinada por agentes de la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái. La fuente precisa que, supuestamente, se respetaba la confidencialidad de las comunicaciones enviadas por el representante legal al Sr. Li, pero que no ocurría lo mismo con todo lo que el Sr. Li escribía a su abogado. La fuente señala que esto es contrario al artículo 33 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual

las personas sospechosas de haber cometido un delito tienen derecho a acceder a un abogado o abogada inmediatamente después de su primer interrogatorio por un órgano investigador.

20. Según la fuente, el Sr. Li no pudo recibir las comunicaciones escritas de su abogado hasta enero de 2017. Por entonces, todavía se le impedía escribir a su abogado o reunirse con él en persona. La primera entrevista en persona entre el Sr. Li y su abogado tuvo lugar en marzo de 2017, después de que la causa se trasladara a la fiscalía el 24 de febrero de 2017. Posteriormente, el Sr. Li y su abogado se reunieron en persona en varias ocasiones. La fuente añade que los representantes consulares de los Estados Unidos pudieron reunirse con el Sr. Li a los pocos días de su arresto inicial y lo visitaron una vez al mes hasta su traslado a la prisión en marzo de 2019.

21. Según la fuente, el Sr. Li no tuvo acceso al expediente de su causa hasta que pudo reunirse con su abogado. Las autoridades chinas indicaron, en comunicaciones verbales con representantes de los Estados Unidos, que el equipaje del Sr. Li contenía supuestamente una pieza fabricada que estaba asociada a Hue Technologies, y que esa pieza era la prueba material que justificaba su detención. Sin embargo, ni en la notificación de arresto ni en el fallo condenatorio dictado por el Tribunal Popular Intermedio núm. 1 de Shanghái en julio de 2018 se menciona dicha prueba material.

22. La fuente señala que el derecho penal chino prevé múltiples excepciones en los casos en que se considera que la persona sospechosa pone en peligro la seguridad nacional. Sin embargo, la decisión sobre si un caso pone o no en peligro la seguridad nacional es, según la fuente, intrínsecamente arbitraria, ya que los órganos de seguridad del Estado tienen autoridad para declarar cualquier cosa secreto de Estado, incluso con carácter retroactivo. En particular, la fuente afirma que los secretos de Estado que supuestamente ha revelado el Sr. Li pueden encontrarse realizando una búsqueda en Internet, incluso desde China.

23. La fuente concluye que las incoherencias mencionadas ponen de manifiesto que la detención del Sr. Li obedece a motivos políticos y no penales, especialmente si se tiene en cuenta que China acostumbra desde hace mucho tiempo a acusar a personas de poner en peligro la seguridad del Estado por razones políticas. La fuente cita también casos de detención de otras personas extranjeras acusadas de poner en peligro la seguridad del Estado en los que las autoridades no revelaron los cargos que se les imputaban alegando que, de hacerlo, se pondría en peligro la seguridad nacional de China.

24. La fuente informa además de que, inicialmente, las autoridades chinas no permitieron ninguna comunicación entre el Sr. Li y su familia, salvo una breve conversación telefónica en junio de 2018, casi dos años después del arresto inicial. El único medio de comunicación directa entre el Sr. Li y su familia era a través de cartas que eran examinadas por las autoridades chinas. Según la fuente, ese proceso de examen retrasaba la entrega de las cartas varias semanas o incluso meses, y en algunos casos las cartas se declararon perdidas o fueron rechazadas sin alegarse motivo alguno. La fuente afirma que esto constituye una infracción directa del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

25. La fuente añade que el Sr. Li pudo hacer dos llamadas telefónicas al mes luego de que fuera trasladado a la prisión de Qingpu en marzo de 2019, aunque la primera llamada no tuvo lugar sino varios meses después, debido a supuestos problemas con el sistema telefónico. Ahora tiene derecho a realizar dos llamadas de 7,5 minutos a su familia al mes. Estas llamadas, así como las visitas de los representantes consulares de los Estados Unidos, son grabadas y vigiladas rigurosamente por las autoridades chinas.

26. La fuente informa de que todas las llamadas, cartas y visitas consulares son vigiladas estrictamente por las autoridades, que no permiten que el Sr. Li se comunique con cargos políticos ni les haga ninguna petición. Además, afirma que las autoridades insisten en que la gravedad del delito del Sr. Li justifica un trato especial, negándole así sus derechos.

27. Por último, la fuente afirma que el Gobierno de China acostumbra a usar la acusación de poner en peligro la seguridad del Estado para detener a personas extranjeras por motivos políticos. Sostiene que la detención del Sr. Li obedece a motivos políticos y no penales. La fuente concluye que la detención del Sr. Li puede achacarse, al menos en parte, a su condición de extranjero de origen chino.

*Respuesta del Gobierno*

28. El 10 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno a través de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que le proporcionara, a más tardar el 11 de mayo de 2020, información detallada sobre la situación del Sr. Li y las observaciones que considerara oportunas sobre las alegaciones de la fuente. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que garantizara la integridad física y mental del Sr. Li.

29. En su respuesta de 29 de abril de 2020, el Gobierno señala que, el 9 de septiembre de 2016, el Sr. Li fue objeto de medidas coercitivas adoptadas de conformidad con la ley por la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái por sospechas de espionaje. El 24 de febrero de 2017, la Oficina trasladó la causa a la fiscalía para que fuera enjuiciada de conformidad con la ley.

30. Según el Gobierno, durante el período en que el Sr. Li fue sometido a medidas coercitivas de acuerdo con la ley, el Ministerio de Seguridad del Estado se reunió con la familia del Sr. Li en Shanghái y convino en que se comunicara con su familia, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Convención Consular entre los Estados Unidos y China, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al mismo tiempo, el Consulado General de los Estados Unidos en Shanghái fue informado sin demora del caso del Sr. Li y se organizaron siete visitas consulares de representantes de la Sección Consular y de Servicios a los Ciudadanos del Consulado General de los Estados Unidos, que también asistieron a dos audiencias de lectura de la sentencia. Los derechos del Sr. Li se han garantizado plenamente.

31. El Gobierno añade que, el 25 de julio de 2018, el Tribunal Popular Intermedio núm. 1 de Shanghái dictó sentencia conforme a la ley en primera instancia, declarando al Sr. Li culpable de espionaje y condenándolo a diez años de prisión, a la confiscación de sus bienes por valor de 50.000 yuan y a ser expulsado del país. El Sr. Li recurrió contra esa sentencia. El 18 de enero de 2019, el Tribunal Popular Superior de Shanghái desestimó el recurso del Sr. Li y confirmó la sentencia original de acuerdo con la ley.

32. Según el Gobierno de China, los tribunales fallaron que el Sr. Li había aceptado un encargo de agentes de una organización de espionaje para que buscara, recopilara y les proporcionara secretos de Estado, poniendo así en peligro la seguridad nacional de China mediante actos que constituirían un delito de espionaje. Los tribunales juzgaron la causa del Sr. Li en estricta conformidad con la ley, garantizando plenamente sus derechos procesales, e informaron sin demora a los representantes de los Estados Unidos del desarrollo del juicio, y en particular de la hora y el lugar de la audiencia en que se dictaría sentencia, e hicieron lo necesario para que asistieran al juicio y observaran la lectura de la sentencia. Durante el juicio, las autoridades de China tomaron medidas especiales por motivos humanitarios, dentro de los límites permitidos por la legislación nacional, y permitieron al Sr. Li hablar con su familia, lo que este les agradeció.

33. El Gobierno también afirma que se adhiere al principio de igualdad ante la ley y que trata a los delincuentes de nacionalidad extranjera de manera legal, estricta, racional y civilizada, de acuerdo con el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Penitenciaria, mientras que se garantiza el derecho legal de dichos delincuentes a la salud y a recibir correspondencia y visitas. Desde que el Sr. Li fue trasladado a la prisión de Qingpu, ninguno de sus contactos con su familia ha sido restringido severamente o vigilado.

*Otras observaciones de la fuente*

34. En sus observaciones, la fuente afirma que el Gobierno no trata en su respuesta las razones fundamentales por las que la detención del Sr. Li es arbitraria según los criterios del Grupo de Trabajo. Por ejemplo, el Gobierno no se refiere a la detención en régimen de aislamiento del Sr. Li durante más de dos meses, de septiembre a noviembre de 2016, que se aplicó sin una orden judicial. Tampoco alude al hecho de que el Sr. Li no tuvo acceso a ninguna forma de asistencia letrada durante todo ese período y durante otros dos meses, en los cuales fue sometido a severos interrogatorios todos los días. La causa del Sr. Li no fue vista por un tribunal hasta abril de 2017, siete meses después de su arresto inicial, y antes de ello era supervisada por la fiscalía. La fuente señala que una autoridad que se encarga de la

acusación pública no puede considerarse una autoridad imparcial e independiente, como ha afirmado el Grupo de Trabajo<sup>2</sup>.

35. Según la fuente, si bien es cierto que los representantes de los Estados Unidos tuvieron acceso a sendas audiencias públicas de lectura de la sentencia el 25 de julio de 2018 y el 18 de enero de 2019, conviene aclarar que se trataba de una mera formalidad. Los juicios reales se celebraron a puerta cerrada el 10 de agosto de 2017 y el 29 de diciembre de 2018, y en ellos se prohibió la asistencia de los representantes consulares, los familiares y cualquier otra persona, en violación del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

36. La fuente explica también que las supuestas “medidas especiales por motivos humanitarios” deben de referirse a una única llamada telefónica antes del juicio entre el Sr. Li y su padre, que estaba enfermo. El argumento esgrimido por el Gobierno en su respuesta según el cual se ha respetado plenamente el derecho del Sr. Li a la correspondencia no tiene mucho fundamento, ya que ha habido numerosos casos, verificables por los representantes consulares de los Estados Unidos, en que la entrega de cartas del Sr. Li a su familia y a cargos políticos fue retrasada para examinarlas, y otros en que esas cartas fueron directamente confiscadas por las autoridades a causa de su contenido. En noviembre de 2019, el Sr. Li señaló haber sido amenazado con un castigo por funcionarios de la prisión por una llamada telefónica en que había instado brevemente a un familiar a que defendiera su causa ante distintas autoridades del Gobierno de los Estados Unidos. Además, las autoridades chinas han indicado expresamente que toda la correspondencia escrita del Sr. Li a su abogado es vigilada y no se considera confidencial.

37. Por último, la fuente señala que el Gobierno no alude en su respuesta al argumento del Sr. Li según el cual los secretos de Estado que supuestamente ha robado pueden obtenerse libremente en Internet, ni al hecho de que en la sentencia no se menciona la prueba material. Todo esto coadyuva a la conclusión de que la detención del Sr. Li obedece a motivos políticos y no jurídicos. La fuente concluye afirmando que la detención arbitraria de personas extranjeras por motivos de espionaje y seguridad nacional es una práctica que han usado con fines políticos numerosos regímenes de todo el mundo que no respetan el imperio de la ley. El caso del Sr. Li es otro ejemplo desafortunado de esa práctica.

### **Deliberaciones**

38. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno sus comunicaciones. Para determinar si la detención del Sr. Li fue arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios que ha establecido en su jurisprudencia para proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. Además, la mera afirmación por el Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

#### *Categoría I*

39. El Grupo de Trabajo examinará en primer lugar si se han producido violaciones según los criterios de la categoría I, que se refiere a la privación de libertad sin que se invoque ningún fundamento jurídico.

40. La fuente afirma, y el Gobierno no lo discute, que al Sr. Li no se le presentó una orden judicial ni se le informó de los motivos de su arresto en el momento de practicarse este, el 9 de septiembre de 2016.

41. Para que una privación de libertad tenga fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice el arresto. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y

<sup>2</sup> Opinión núm. 12/2016, párr. 20.

aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden judicial, lo cual no se hizo en el presente caso<sup>3</sup>.

42. El derecho internacional relativo al derecho a la libertad personal permite restricciones e incluye el derecho a que se muestre una orden judicial, en los casos en que no se trate de arrestos realizados en flagrante delito, para garantizar la objetividad del proceso de arresto. Además, la decisión sobre si el arresto está justificado debe ser tomada por una autoridad externa, es decir, un poder judicial competente, independiente e imparcial. Es este un elemento intrínseco del derecho a la libertad y la seguridad de la persona y de la prohibición de la privación arbitraria en virtud de los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión<sup>4</sup>.

43. El Grupo de Trabajo también considera que, para invocar un fundamento jurídico de la privación de libertad, las autoridades deberían haber informado al Sr. Li de los motivos de su arresto en el momento de practicarse este, y haberle comunicado sin demora los cargos que se le imputaban<sup>5</sup>. La omisión de ese deber representa una infracción del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Además, hace que su arresto carezca de todo fundamento jurídico.

44. La fuente sostiene además, y el Gobierno, una vez más, no lo discute, que el Sr. Li fue objeto de desaparición forzada y de detención en régimen de aislamiento durante más de dos meses, desde el momento de su arresto, el 9 de septiembre de 2016, hasta su arresto formal y su traslado al centro de detención núm. 1 de Shanghái, el 25 de noviembre de 2016. El Grupo de Trabajo recuerda que la desaparición forzada viola el derecho internacional y constituye una forma especialmente grave de detención arbitraria<sup>6</sup>. Este tipo de privación de libertad, que entraña la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona afectada o a reconocer su detención, carece de todo fundamento jurídico válido en cualquier circunstancia. También es intrínsecamente arbitraria, ya que sustrae a la persona afectada del amparo de la ley, incumpliendo el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>7</sup>. El Grupo de Trabajo recuerda que el acto de la desaparición forzada se define de forma que lo distingue claramente de otros delitos afines, como la privación forzada de libertad, el rapto, el secuestro o la detención en régimen de incomunicación, entre otros. Toda definición debe contener, como mínimo, los tres elementos acumulativos siguientes: privación de libertad contra la voluntad de la persona afectada; participación de agentes del Estado, al menos indirectamente por aquiescencia; y negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona afectada<sup>8</sup>. El Grupo

<sup>3</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 93/2017, párr. 44; núm. 10/2018, párrs. 45 y 46; núm. 36/2018, párrs. 39 y 40; núm. 46/2018, párr. 48; núm. 9/2019, párr. 29; núm. 32/2019, párr. 29; núm. 33/2019, párr. 48; núm. 44/2019, párr. 52; núm. 45/2019, párr. 51; y núm. 46/2019, párr. 51.

<sup>4</sup> El Grupo de Trabajo ha sostenido desde sus inicios que la práctica de arrestar a personas sin una orden judicial hace que su detención sea arbitraria. Véanse, por ejemplo, las decisiones núm. 1/1993, párrs. 6 y 7; núm. 3/1993, párrs. 6 y 7; núm. 4/1993, párr. 6; núm. 5/1993, párrs. 6, 8 y 9; núm. 27/1993, párr. 6; núm. 30/1993, párrs. 14 y 17 a); núm. 36/1993, párr. 8; núm. 43/1993, párr. 6; y núm. 44/1993, párrs. 6 y 7. Para una jurisprudencia más reciente, véanse las opiniones núm. 38/2013, párr. 23; núm. 48/2016, párr. 48; núm. 21/2017, párr. 46; núm. 63/2017, párr. 66; núm. 76/2017, párr. 55; núm. 83/2017, párr. 65; núm. 88/2017, párr. 27; núm. 93/2017, párr. 44; núm. 3/2018, párr. 43; núm. 10/2018, párr. 46; núm. 26/2018, párr. 54; núm. 30/2018, párr. 39; núm. 38/2018, párr. 63; núm. 47/2018, párr. 56; núm. 51/2018, párr. 80; núm. 63/2018, párr. 27; núm. 68/2018, párr. 39; y núm. 82/2018, párr. 29.

<sup>5</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 10/2015, párr. 34. Véanse también las opiniones núm. 32/2019, párr. 29; núm. 33/2019, párr. 48; núm. 44/2019, párr. 52; núm. 45/2019, párr. 51; y núm. 46/2019, párr. 51.

<sup>6</sup> Véanse las opiniones núm. 5/2020, párr. 74; y núm. 6/2020, párr. 43.

<sup>7</sup> Véase la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Véanse también las opiniones núm. 82/2018, párr. 28; núm. 18/2019, párr. 33; núm. 22/2019, párr. 67; núm. 26/2019, párr. 88; núm. 28/2019, párr. 61; núm. 29/2019, párr. 54; núm. 36/2019, párr. 35; núm. 41/2019, párr. 32; núm. 42/2019, párr. 48; núm. 51/2019, párr. 58; y núm. 56/2019, párr. 79.

<sup>8</sup> A/HRC/16/48/Add.3, párr. 21. Véase también E/CN.4/1996/38, párr. 55.

de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

45. Como ha señalado sistemáticamente el Grupo de Trabajo, la detención de personas en régimen de aislamiento viola su derecho a comparecer ante un tribunal y a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal, por lo que es contraria al artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>9</sup>. El Grupo de Trabajo recuerda que la supervisión judicial de la detención es una salvaguarda fundamental de la libertad personal y es esencial para garantizar que la detención tenga un fundamento jurídico. Dado que el Sr. Li no pudo ponerse en contacto con nadie, en particular con su abogado, lo cual es una salvaguarda esencial para garantizar la capacidad de toda persona detenida para impugnar personalmente su detención, también se violó su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

46. El Sr. Li fue detenido en régimen de aislamiento con arreglo a una medida de vigilancia domiciliaria en un lugar designado adoptada en virtud del artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual la vigilancia domiciliaria debe realizarse en el domicilio de la persona sospechosa o acusada o en un lugar de residencia designado si no tiene domicilio fijo. En el caso de un delito que pueda poner en peligro la seguridad del Estado o esté relacionado con el terrorismo, si se considera que la vigilancia domiciliaria en el domicilio de la persona sospechosa o acusada puede obstaculizar la investigación, la vigilancia puede realizarse, previa aprobación de la Fiscalía Popular o del órgano de seguridad pública del nivel inmediatamente superior, en un lugar de residencia designado, siempre que no sea un centro de detención o un lugar especial para investigar el caso. Además, el artículo mencionado dispone que cuando una persona sospechosa o acusada es sometida a vigilancia domiciliaria en un lugar de residencia designado, su familia debe ser informada en un plazo de 24 horas a partir de la aplicación de la medida, a menos que la notificación no pueda tramitarse. Cuando la persona sospechosa o acusada que está sometida a vigilancia domiciliaria designa a un representante legal, se aplica el artículo 33 de la Ley<sup>10</sup>. La Fiscalía Popular tiene la obligación de supervisar la legalidad de la decisión y la ejecución de la medida de vigilancia domiciliaria en los lugares de residencia designados.

47. El Grupo de Trabajo considera que la expresión “vigilancia domiciliaria en un lugar de residencia designado” es poco apropiada, ya que, en el caso del Sr. Li, el sospechoso o acusado que es sometido a esa medida no está confinado en su lugar de residencia habitual —es decir, bajo arresto domiciliario—, sino en un lugar de residencia designado, que bien puede ser una prisión. A efectos prácticos, la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái, actuando por conducto de la fiscalía, tiene la facultad de hacer desaparecer a una persona sin supervisión judicial. En opinión del Grupo de Trabajo, el hecho de que se otorgue esa facultad a miembros de las fuerzas del orden carece de fundamento jurídico<sup>11</sup>.

48. El Grupo de Trabajo y otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales han expresado su preocupación por el hecho de que el régimen de vigilancia domiciliaria en un lugar designado, modificado en el artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2012, se esté empleando de una manera que es contraria a los derechos humanos<sup>12</sup>. En particular, el Grupo de Trabajo y los titulares de mandatos expresaron las siguientes preocupaciones:

a) Esta práctica, que consiste en detener a personas en régimen de aislamiento para interrogarlas durante períodos prolongados sin revelar su paradero, equivale a una detención secreta y es una forma de desaparición forzada;

b) La práctica de imponer una medida de vigilancia domiciliaria en un lugar designado sin supervisión judicial y sin presentar formalmente cargos contraviene el derecho

<sup>9</sup> Véanse las opiniones núm. 45/2017, núm. 46/2017, núm. 79/2017, núm. 11/2018 y núm. 35/2018.

<sup>10</sup> En la revisión de 2018 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo correspondiente es ahora el artículo 34.

<sup>11</sup> Opinión núm. 36/2019, párr. 38.

<sup>12</sup> Comunicación CHN 15/2018, de 24 de agosto de 2018. Disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23997>. Véase también la opinión núm. 15/2019, párr. 42.



de toda persona a no ser privada arbitrariamente de su libertad y a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal sin demora, así como el derecho de las personas acusadas a defenderse mediante un abogado o abogada de su elección;

c) Las disposiciones relativas a la vigilancia domiciliaria en un lugar designado parecen permitir detener en régimen de aislamiento durante largos períodos y en lugares no divulgados a personas sospechosas de determinados delitos, lo cual podría equivaler a imponerles tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o incluso torturas, y además podría exponerlas a un mayor riesgo de sufrir otros abusos, entre ellos torturas;

d) Las disposiciones relativas a la vigilancia domiciliaria en un lugar designado parecen utilizarse para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus representantes legales.

49. El Grupo de Trabajo observa que no se hizo comparecer al Sr. Li ante un juez o jueza sin demora, es decir, dentro de las 48 horas siguientes a su arresto, salvo circunstancias absolutamente excepcionales, según la norma internacional establecida en la jurisprudencia del Grupo de Trabajo<sup>13</sup>. Por lo tanto, el Gobierno ha violado el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios 11, 37 y 38 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

50. El Grupo de Trabajo observa además que al Sr. Li no se le concedió el derecho a solicitar a un tribunal que decidiera sin demora sobre la legalidad de su detención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios 11, 32 y 37 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. En los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal se afirma que el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo cuya ausencia constituye una violación de los derechos humanos, y que es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática<sup>14</sup>. Este derecho, que es de hecho una norma imperativa de derecho internacional, se aplica a todas las formas y situaciones de privación de libertad<sup>15</sup>. El control judicial de la privación de libertad es una salvaguardia fundamental de la libertad personal y es esencial para garantizar que la detención tenga un fundamento jurídico<sup>16</sup>.

51. El Grupo de Trabajo tampoco puede dejar de observar que, en la práctica, el Sr. Li fue privado de su derecho a la asistencia letrada y a la representación, que es una parte intrínseca del derecho a la libertad y a la seguridad y de la prohibición de la detención arbitraria, por lo que se violaron los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los principios 15, 17 y 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; y los principios 1, 5, 7, 8, 21 y 22 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Según el principio 9 y la directriz 8 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica de un abogado o abogada de su elección, en cualquier momento de su detención, en particular inmediatamente después de que se practique el arresto, y en el momento del arresto se las debe informar puntualmente de este derecho; tampoco se debe restringir ilegal o injustificadamente el acceso a la asistencia letrada<sup>17</sup>. El Grupo de Trabajo señala que el acceso

<sup>13</sup> Opiniones núm. 57/2016, párrs. 110 y 111; núm. 2/2018, párr. 49; núm. 83/2018, párr. 47; núm. 11/2019, párr. 63; núm. 20/2019, párr. 66; núm. 26/2019, párr. 89; núm. 30/2019, párr. 30; núm. 36/2019, párr. 36; núm. 42/2019, párr. 49; núm. 51/2019, párr. 59; núm. 56/2019, párr. 80; núm. 76/2019, párr. 38; y núm. 82/2019, párr. 76.

<sup>14</sup> A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, párr. 11, y anexo, párr. 47 a). Véase también la opinión núm. 39/2018, párr. 35.

<sup>16</sup> Opiniones núm. 35/2018, párr. 27; núm. 83/2018, párr. 47; núm. 32/2019, párr. 30; núm. 33/2019, párr. 50; núm. 44/2019, párr. 54; núm. 45/2019, párr. 53; núm. 59/2019, párr. 51; y núm. 65/2019, párr. 64.

<sup>17</sup> A/HRC/30/37, anexo.

a un abogado o abogada desde el inicio de la detención es una salvaguardia esencial para garantizar que la persona detenida pueda impugnar el fundamento jurídico de su detención<sup>18</sup>.

52. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Li carece de fundamento jurídico y es, por lo tanto, arbitraria según los criterios de la categoría I.

### *Categoría III*

53. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Li no tuvo acceso a un abogado o abogada de su elección desde el momento de su arresto, el 9 de septiembre de 2016, hasta enero de 2017, cuando recibió las primeras comunicaciones escritas de su abogado en ese período de cuatro meses, en cuyos dos primeros meses había sido objeto de severos interrogatorios diarios durante la vigilancia domiciliaria en un lugar designado. Incluso después, se le impidió escribir a su abogado o reunirse con él en persona, y la primera visita en persona tuvo lugar en marzo de 2017, luego de que la causa se trasladara a la fiscalía el 24 de febrero de 2017.

54. En opinión del Grupo de Trabajo, el Gobierno no respetó el derecho del Sr. Li a la asistencia letrada en todo momento, que es una parte intrínseca del derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, de conformidad con los artículos 3, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los principios 15, 17 y 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; y los principios 1, 5, 7, 8, 21 y 22 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados<sup>19</sup>.

55. El Grupo de Trabajo considera que esta violación mermó y comprometió sustancialmente la capacidad del Sr. Li para defenderse en cualquier procedimiento judicial posterior. Como destacó el Grupo de Trabajo en el principio 9 y la directriz 8 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica de un abogado o abogada de su elección, en cualquier momento de su detención, en particular inmediatamente después de que se practique el arresto, y en el momento del arresto se las debe informar puntualmente de este derecho. Además, no se debe restringir ilegal o injustificadamente el acceso a la asistencia letrada<sup>20</sup>.

56. El Grupo de Trabajo observa también que el Gobierno no ha respetado los derechos del Sr. Li, incluido el derecho a ser informado sin demora de su derecho a la asistencia consular, de conformidad con el artículo 36, párrafo 1 b), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Esta y otras vulneraciones de los derechos garantizados por el artículo 36, párrafo 1 a), b) y c), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares constituyen graves violaciones del derecho a que se respeten las garantías procesales y del derecho a un juicio imparcial, ambos amparados por los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

57. El Grupo de Trabajo observa que la Asamblea General, en su resolución 72/179, reafirmó categóricamente el deber de los Estados partes de hacer respetar plenamente y cumplir la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, particularmente en relación con el derecho que tienen todos los ciudadanos extranjeros, sea cual sea su estatus migratorio, a comunicarse con un funcionario consular del Estado que envía en caso de arresto, encarcelamiento, prisión preventiva o detención, y la obligación del Estado receptor de informar sin demora al ciudadano extranjero de sus derechos en virtud de la Convención<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Opinión núm. 40/2020, párr. 29.

<sup>19</sup> Véase también la comunicación TUR 15/2018, de 22 de octubre de 2018. Disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24130>.

<sup>20</sup> A/HRC/30/37, anexo. Véase también A/HRC/45/16, párr. 55.

<sup>21</sup> Véase también la resolución 72/149 de la Asamblea General. En su resolución 73/175, en el contexto de la pena de muerte, la Asamblea General exhortó a los Estados a que cumplieran sus obligaciones contraídas en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y

58. Además, el principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión destaca la importancia de la asistencia consular para las personas extranjeras detenidas o encarceladas mencionando específicamente su derecho a ponerse en comunicación por los medios adecuados con una oficina consular o la misión diplomática del Estado del que sean nacionales<sup>22</sup>. En su regla 62, párrafo 1, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) disponen también que los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con los representantes diplomáticos y consulares del Estado del que sean nacionales<sup>23</sup>.

59. El Grupo de Trabajo expresa también su preocupación por la alegación, a primera vista creíble, de torturas —en particular el severo interrogatorio realizado a diario por los agentes de la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái durante un estado de desaparición forzada y de detención en régimen de aislamiento que se prolongó dos meses— para inducir al Sr. Li a declararse culpable. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado indicios razonables de que se violaron los artículos 5 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 2 y 16, párrafo 1, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el principio 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; y la regla 1 de las Reglas Nelson Mandela. La omisión por el Gobierno de su deber de adoptar medidas correctivas de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura y el principio 33 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión obliga al Grupo de Trabajo a remitir el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que lo examine<sup>24</sup>.

60. En opinión del Grupo de Trabajo, las torturas que sufrió el Sr. Li no solo son una grave violación de los derechos humanos en sí mismas, sino que además merman gravemente la capacidad de toda persona para defenderse y obstaculizan el ejercicio de su derecho a un juicio con las debidas garantías, especialmente a la luz del derecho de toda persona a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable, de conformidad con el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La utilización de una confesión obtenida mediante malos tratos también constituye una violación del principio 21 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión<sup>25</sup>. Además, como ha dictaminado anteriormente el

---

especialmente el derecho a recibir información sobre la asistencia consular. En su resolución 42/24, el Consejo de Derechos Humanos también exhortó a los Estados a que cumplieran esas obligaciones. Véanse también las resoluciones de la Asamblea General 74/166, 74/167 y 74/168, y la resolución 40/20 del Consejo de Derechos Humanos.

<sup>22</sup> Véase también el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que Viven (resolución 40/144 de la Asamblea General, anexo).

<sup>23</sup> Véase también la directriz 21 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, en lo relativo al permiso de la supervisión de todos los lugares de detención de inmigrantes y la presentación de información pública por los funcionarios consulares (previa solicitud de las personas detenidas en el contexto de la inmigración) para velar por que el ejercicio del derecho a recurrir ante un tribunal para impugnar la legalidad y la arbitrariedad de la detención y recibir una reparación adecuada sea accesible y efectivo (A/HRC/30/37, anexo, párr. 110).

<sup>24</sup> Opiniones núm. 39/2018, párr. 42; núm. 22/2019, párr. 77; y núm. 28/2019, párr. 69. Como observó el Comité contra la Tortura en sus observaciones finales sobre el Canadá (CAT/C/CAN/CO/6 y CAT/C/CAN/CO/7), en relación con las acciones civiles presentadas contra la República Islámica del Irán en los tribunales nacionales del Canadá por víctimas de torturas o actos de violencia sexual a manos de las autoridades de la República Islámica del Irán, los Estados deben garantizar que todas las víctimas de la tortura tengan una vía de recurso y puedan obtener reparación, donde sea que hayan ocurrido los actos de tortura e independientemente de la nacionalidad del autor o de la víctima, incluso restringiendo la aplicación de la inmunidad soberana.

<sup>25</sup> Véanse también las opiniones núm. 48/2016, núm. 3/2017, núm. 6/2017, núm. 29/2017 y núm. 39/2018.

Grupo de Trabajo, las confesiones realizadas en ausencia de un abogado o abogada no son admisibles<sup>26</sup>.

61. El Grupo de Trabajo toma nota además de la denegación del derecho procesal del Sr. Li a ser visitado por sus familiares y a tener correspondencia con ellos, así como a tener oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho, de conformidad con los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y las reglas 43, párrafo 3, y 58 de las Reglas Nelson Mandela<sup>27</sup>.

62. La fuente alega, y el Gobierno no lo discute, que las audiencias del juicio del Sr. Li, tanto en primera instancia como en apelación, se celebraron a puerta cerrada, lo cual infringe su derecho a ser oído públicamente, amparado por los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Gobierno no ha ofrecido ningún motivo que pueda justificar un proceder tan excepcional. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo concluye que esas audiencias a puerta cerrada constituyeron una violación de los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>28</sup>.

63. El Grupo de Trabajo recuerda además que, antes de la audiencia en que se dictaría sentencia, la jueza que presidía el tribunal señaló que no tenía ningún control real sobre el resultado del asunto y que estaba “esperando las orientaciones de su jefe” con respecto a la condena del Sr. Li. La fuente afirma que ese hecho es un indicio claro de que el Sr. Li no fue sometido a un juicio con las debidas garantías por un tribunal imparcial. Más bien, la detención del Sr. Li fue ordenada por las autoridades políticas que estaban facultadas para imponer su criterio a la jueza. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo concluye que la falta de independencia judicial constituye una infracción de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y remite el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

64. Teniendo en cuenta lo señalado, el Grupo de Trabajo concluye que las violaciones del derecho a un juicio imparcial y a las garantías procesales son de tal gravedad que confieren a la privación de libertad del Sr. Li carácter arbitrario con arreglo a los criterios de la categoría III.

65. En sus 29 años de historia, el Grupo de Trabajo ha determinado que China había violado sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en más de 95 casos<sup>29</sup>. Al Grupo de Trabajo le preocupa que esto indique la existencia de un problema sistémico con las detenciones arbitrarias en China que equivalga a una grave violación del derecho internacional. El Grupo de Trabajo recuerda que, en determinadas circunstancias, el

<sup>26</sup> Opiniones núm. 40/2012, párr. 48; núm. 1/2014, párr. 22; y núm. 14/2019, párr. 71.

<sup>27</sup> Opiniones núm. 35/2018, párr. 39; núm. 44/2019, párrs. 74 y 75; y núm. 45/2019, párr. 76.

<sup>28</sup> Opiniones núm. 20/2019, párr. 85; núm. 22/2019, párr. 75; y núm. 71/2019, párr. 89.

<sup>29</sup> Véanse las decisiones núm. 43/1993, núm. 44/1993, núm. 53/1993, núm. 63/1993, núm. 64/1993, núm. 65/1993, núm. 66/1993, núm. 46/1995 y núm. 19/1996, y las opiniones núm. 30/1998, núm. 1/1999, núm. 2/1999, núm. 16/1999, núm. 17/1999, núm. 19/1999, núm. 21/1999, núm. 8/2000, núm. 14/2000, núm. 19/2000, núm. 28/2000, núm. 30/2000, núm. 35/2000, núm. 36/2000, núm. 7/2001, núm. 8/2001, núm. 20/2001, núm. 1/2002, núm. 5/2002, núm. 15/2002, núm. 2/2003, núm. 7/2003, núm. 10/2003, núm. 12/2003, núm. 13/2003, núm. 21/2003, núm. 23/2003, núm. 25/2003, núm. 26/2003, núm. 14/2004, núm. 15/2004, núm. 24/2004, núm. 17/2005, núm. 20/2005, núm. 32/2005, núm. 33/2005, núm. 38/2005, núm. 43/2005, núm. 11/2006, núm. 27/2006, núm. 41/2006, núm. 47/2006, núm. 32/2007, núm. 33/2007, núm. 36/2007, núm. 21/2008, núm. 29/2008, núm. 26/2010, núm. 29/2010, núm. 15/2011, núm. 16/2011, núm. 23/2011, núm. 29/2011, núm. 7/2012, núm. 29/2012, núm. 36/2012, núm. 51/2012, núm. 59/2012, núm. 2/2014, núm. 3/2014, núm. 4/2014, núm. 8/2014, núm. 21/2014, núm. 49/2014, núm. 55/2014, núm. 3/2015, núm. 39/2015, núm. 11/2016, núm. 12/2016, núm. 30/2016, núm. 43/2016, núm. 46/2016, núm. 4/2017, núm. 5/2017, núm. 59/2017, núm. 69/2017, núm. 81/2017, núm. 22/2018, núm. 54/2018, núm. 62/2018, núm. 15/2019, núm. 35/2019, núm. 36/2019, núm. 72/2019, núm. 76/2019 y núm. 11/2020.

encarcelamiento generalizado o sistemático u otras privaciones graves de libertad contrarias a las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad<sup>30</sup>.

66. Por último, el Grupo de Trabajo agradecería la oportunidad de realizar una visita al país para ayudar al Gobierno a combatir la privación arbitraria de libertad. Dado que ha transcurrido un período considerable desde que visitó China en octubre de 1997 y septiembre de 2004, el Grupo de Trabajo considera que es el momento de realizar una nueva visita. El Grupo de Trabajo recuerda que presentó una solicitud de visita el 15 de abril de 2015 y espera una respuesta positiva.

### **Decisión**

67. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Kai Li es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 6, 8, 9, 10, 11, párrafo 1, y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I y III.

68. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de China que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Li sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que se adhiera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

69. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Li inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que supone en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que tome medidas urgentes para garantizar la liberación inmediata del Sr. Li.

70. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Li y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

71. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adapte sus leyes, en particular en lo que respecta al uso de la vigilancia domiciliaria en un lugar designado en virtud del artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a los compromisos contraídos por China en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

72. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; y al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que tomen las medidas correspondientes.

73. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### **Procedimiento de seguimiento**

74. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de

<sup>30</sup> A/HRC/13/42, párr. 30; y opiniones núm. 1/2011, párr. 21; núm. 37/2011, párr. 15; núm. 38/2011, párr. 16; núm. 39/2011, párr. 17; núm. 4/2012, párr. 26; núm. 38/2012, párr. 33; núm. 47/2012, párrs. 19 y 22; núm. 50/2012, párr. 27; núm. 60/2012, párr. 21; núm. 9/2013, párr. 40; núm. 34/2013, párrs. 31, 33 y 35; núm. 35/2013, párrs. 33, 35 y 37; núm. 36/2013, párrs. 32, 34 y 36; núm. 48/2013, párr. 14; núm. 22/2014, párr. 25; núm. 27/2014, párr. 32; núm. 34/2014, párr. 34; núm. 35/2014, párr. 19; núm. 36/2014, párr. 21; núm. 44/2016, párr. 37; núm. 60/2016, párr. 27; núm. 32/2017, párr. 40; núm. 33/2017, párr. 102; núm. 36/2017, párr. 110; núm. 51/2017, párr. 57; y núm. 56/2017, párr. 72.

seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Li y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Li;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Li y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de China con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

75. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

76. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

77. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>31</sup>.

*[Aprobada el 25 de noviembre de 2020]*

---

<sup>31</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.